

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**



**SALA LABORAL**

Medellín, catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

**SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001 31 05 008 2019 00265 00, promovido por el señor **RIGOBERTO VEGA SILVA** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, con la finalidad de revisar en consulta la sentencia proferida el 27 de enero de 2020 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **138**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

### ANTECEDENTES

El señor Rigoberto Vega Silva demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones pretendiendo el reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: pensión de vejez al amparo del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, indexación y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que nació el 8 de agosto de 1953. El 3 de septiembre de 2018 solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, y la entidad se la negó por medio de la Resolución. SUB - 251549 de 24 de septiembre de 2018, aduciendo que contaba con 979 semanas cotizadas en toda su vida laboral. El 4 de octubre de 2018 interpuso recurso de reposición frente al acto administrativo referido, el cual fue resuelto mediante Resolución SUB-298469 de 16 de noviembre de 2018 confirmando la decisión. Aduce que en su historia laboral no se tienen en cuenta los siguientes periodos: del 1° de febrero al 30 de julio de 1979: 25,74 semanas, del 1° de noviembre al 31 de diciembre de 1986: 8.58 semanas, del 1° al 30 de enero de 1998: 3,29 semanas, del 1° al 31 de febrero de 1998: 4,29 semanas, y del 1° al 15 de marzo de 1998: 2.14 semanas, por lo que acredita un total de 1.023.75 semanas. La reclamación administrativa se encuentra agotada.

En sentencia proferida el 27 de enero de 2020, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones a pagar a el señor Rigoberto Vega Silva lo siguiente: pensión de vejez al amparo del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1° de febrero de 2015 y en cuantía inicial de \$3.560.055, sobre 13 mesadas anuales; la suma de \$234.210.763 por retroactivo pensional causado hasta el 31 de enero de 2020; la suma de \$4.475.956 a partir del 1° de febrero de 2020 por mesada pensional; intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre el retroactivo pensional reconocido desde el 4 de enero de 2019 hasta la fecha de

pago de la obligación y costas procesales, y autorizó a Colpensiones para descontar los aportes en salud del retroactivo pensional reconocido.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

La apoderada del demandante dentro del término legal allegó escrito de alegatos de conclusión, solicitando se confirme la sentencia proferida por el *a quo*.

### **PROBLEMA JURÍDICO**

El problema jurídico, de esta segunda instancia, consiste en determinar si el demandante como beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cumple los requisitos previstos en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, para acceder a la pensión de vejez y si le asiste el derecho a retroactivo pensional e intereses moratorios.

### **CONSIDERACIÓN PRELIMINAR**

Examinada en conjunto la prueba documental que reposa en el expediente, la Sala encuentra:

- i) Que el señor Rigoberto Vega Silva nació el 8 de agosto de 1953.
- ii) Que el citado actor le reclamó administrativamente a Colpensiones, el 3 de septiembre de 2018, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, misma que le fue negada mediante la Resolución SUB 251549 de 24 de septiembre de 2018, notificada en la misma fecha, por acreditar 979 semanas sufragadas.
- iii) Que frente al acto administrativo referido interpuso recurso de reposición y la entidad en la Resolución SUB 298469 de 16 de noviembre de 2018, confirmó lo resuelto.

- iv) Que el 19 de febrero de 2019, el Padre Carlos H. Oviedo G. Rector del Colegio Bolívar de Soacha, certificó que el señor Rigoberto Vega Silva laboró para dicha institución del 1º de febrero al 30 de noviembre de 1979 en el cargo de docente, devengando un salario mensual de \$5.200. Que estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales. Y que el Colegio Bolívar pertenecía al Centro Parroquial de Soacha con numero patronal 01-00-8206849.
- v) Que la Notaria Segunda del Círculo de Soacha Cundinamarca expidió el 16 de octubre de 2014 copia extraída del original del documento y /o formulario "... DE ENTRADA DEL TRABAJADOR...", que da cuenta que el empleador Centro Parroquial de Soacha con número patronal 01-00-8206849, afilió al señor Rigoberto Vega Silva, al Instituto de Seguros Sociales, como profesor, con fecha de ingreso a la empresa del 1º de febrero de 1979 y con un salario de \$5.000.
- vi) Que en Acta de Transacción de 3 de marzo de 1998 la Industria Colombiana de Llantas S.A. – ICOLLANTAS y el señor Rigoberto Vega Silva dieron por terminado de mutuo acuerdo el contrato de trabajo que vinculó a las partes el 10 de marzo de 1981 fijando como fecha de terminación el 15 de marzo de 1998. Además, acordaron que la Industria Colombiana de Llantas S.A. – ICOLLANTAS liquidaría y pagaría hasta el 15 de marzo de 1998 el valor de las prestaciones sociales a las que hubiere lugar, y que reconocería al trabajador la suma de \$84.847.000 correspondientes a auxilio voluntario a título de mera liberalidad, suma que no constituiría factor de salarios ni de prestaciones sociales. En virtud de la terminación del vínculo laboral por mutuo acuerdo el señor Rigoberto Vega Silva manifestó renunciar expresamente a cualquier reclamo o acción contra la empleadora, encontrándose ésta a paz y salvo por concepto de salarios, prestaciones e indemnizaciones surgidas con motivo del contrato de trabajo.

- vii) Que la Dirección Regional Santafé de Bogotá D.C. y Cundinamarca División de Trabajo Inspección 16 de Trabajo en el Acta No. 007 de 6 de abril de 1998, dejó constancia que la Industria Colombiana de Llantas S.A. – ICOLLANTAS, efectuó la liquidación final de las acreencias laborales del señor Rigoberto Vega Silva hasta la fecha de terminación del contrato de trabajo y reconoció una suma conciliatoria, por valor de \$66.264.149 que recibiría el trabajador a satisfacción a través de cheque. Que, con ello, el citado demandante expresó conciliar cualquier reclamación o acción judicial o extrajudicial que hubiere instaurado contra el ex empleador relacionada con cualesquiera y eventuales reajustes salariales cualquiera que sea la causa de dicha reclamación, así como las consiguientes reliquidaciones de prestaciones sociales legales y extralegales que se pudieren derivar de dichos reajustes. Declarando a la Industria Colombiana de Llantas S.A. – ICOLLANTAS a paz y salvo por todo concepto de salarios, comisiones de cualquier índole, vacaciones, horas extras dominicales y festivos, incrementos salariales de cualquier índole, descansos, recargos, prestaciones legales y extralegales, reajustes de prestaciones sociales y demás acreencias laborales, descuentos, indemnizaciones y en general, por toda clase de eventuales acreencias laborales que se pudieran derivar del contrato de trabajo que vinculó a las partes, y aprobó dicha conciliación por no vulnerar derechos ciertos e indiscutibles, haciendo tránsito a cosa juzgada.
- viii) Que el 27 de agosto de 2014, Colpensiones dio respuesta al actor a la solicitud de corrección de historia laboral y le informó que “...*Se evidenció que el aportante CENTRO PARROQUIAL DE SOACHA, únicamente realizó cotizaciones a su nombre para los periodos que se reflejan en su historia laboral...*”. Que el empleador ICOLLANTAS S.A. “...*efectuó cotizaciones a su nombre, en el periodo comprendido entre 1986-11, 1986-12, únicamente para salud, por tal razón este tiempo no será tenido en cuenta en el total de semanas cotizadas a pensión. Por otro lado, se visualizan deudas presuntas generando intereses pendientes por pagar, debido a que el*

*empleador no efectuó pagos para los ciclos 1997-02, 1997-03, razón por la cual, y de acuerdo con la imputación de pagos que trata el Decreto 1818 de 1996 y 1406 de 1999, no contabiliza el total de días cotizados para los ciclos 1998-01, 1998-02 de igual manera no se evidencia registro de pago para el ciclo 1998-03. En razón de lo anterior y de acuerdo con las atribuciones que nos competen y a las leyes vigentes, hemos requerido al empleador el pago de los ciclos pendientes...”.*

- ix) Que el 5 de diciembre de 2014, Colpensiones le comunicó al actor que respecto de las acciones de cobro a la empleadora INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS ICOLLANTAS “...La empresa fue asignada a la casa de cobranzas Aportes en Línea quienes iniciaron contacto desde el 16 de julio, inicialmente el aportante indicó no estar de acuerdo con los anexos para dar inicio a la operación e información que se comunicarían con Colpensiones directamente este contacto fue con el abogado Hugo Olmos, el 24 de septiembre la señora Ana Lucia Gómez representante legal informa que el abogado Olmos ya no labora con la compañía y que hará la remisión de los documentos iniciales los cuales llegaron el 10 de noviembre a la casa de cobranzas. El 18 de noviembre se remite de nuevo estados de cuenta y formatos para la toma de novedades las cuales no han llegado aún por parte del aportante, a la fecha se está llevando a cabo el proceso de depuración y análisis del estado de cuenta con el empleador en mención para poder llevar a cabo el pago de las deudas a que haya lugar o las correcciones respectivas a las novedades de cada una de las historias laborales de los trabajadores...”.
- x) Que el 6 de febrero de 2015, la entidad demandada dando respuesta a la solicitud de cálculo actuarial por omisión del empleador privado, precisó “... se observa que si el empleador no afilió o no reportó novedad de vínculo laboral al sistema general de seguridad social en pensiones a su empleado, deberá transferir el valor actualizado (cálculo actuarial) a satisfacción de la entidad administradora, para que estos aportes le sean tenidos en cuenta como tiempo de cotización para efectos del eventual reconocimiento de la pensión. Esta obligación por disposición del artículo 33 de la Ley 100 de

*1993, se encuentra en cabeza del empleador por cuanto omitió uno de los deberes legales que tenía con su trabajador...”.*

- xi) Que el 30 de marzo de 2015, la entidad emitió otra respuesta de solicitud de corrección de historia laboral indicándole al accionante que “...*el aportante CENTRO PARROQUIAL DE SOACHA, únicamente realizó cotizaciones a su nombre para los periodos que se reflejan en su historia laboral...*”. Que en caso de estar de acuerdo debería suministrar documentos probatorios que dieran cuenta de la relación laboral en los periodos 197902 a 197907. “...*Cabe aclarar que el ingreso tiene 154 días ya que es un ingreso retroactivo asentado por el empleador CENTRO PARROQUIAL DE SOACHA en el ciclo 197908...*”. Que en relación ICOLLANTAS S.A. “...*efectuó cotizaciones a su nombre, en el periodo comprendido entre 1986-11, 1986-12, únicamente para salud, por tal razón este tiempo no será tenido en cuenta en el total de semanas cotizadas a pensión... En el historial de pagos se visualizan deudas presuntas generando intereses pendientes por pagar, debido a que el empleador no efectuó pagos para los ciclos 1997-02, 1997-03, razón por la cual, y de acuerdo con la imputación de pagos que trata el Decreto 1818 de 1996 y 1406 de 1999, no contabiliza el total de días cotizados para los ciclos 1998-01, 1998-02 de igual manera no se evidencia registro de pago para el ciclo 1998-03. En razón de lo anterior y de acuerdo con las atribuciones que nos competen y a las leyes vigentes, hemos requerido al empleador el pago de los ciclos pendientes...*”.

La Juzgadora de primera instancia señaló que la prueba documental da cuenta que el demandante laboró un total de 39.42 semanas al servicio del Centro Parroquial de Soacha pues así lo certificó dicho empleador al precisar que estuvo vinculado entre el 1° de febrero y el 30 de noviembre de 1979, y que obra además “documento de entrada” al ISS , con fecha de ingreso a dicho Centro Parroquial de 1° de febrero de 1979, por lo que el empleador dejó de cotizar entre el 1° de febrero y el 31 de julio de 1979, un total de 24.99 semanas. Que con respecto al empleador ICOLLANTAS S.A. se deben contabilizar los periodos causados entre el 10 de marzo de 1981 y el 28 de febrero de 1998 equivalentes a 883

semanas, no obstante, Colpensiones solo totaliza 867.3 semanas, por ende, procede la sumatoria de 16.56 semanas que se aducen en mora, en la medida que las consecuencias de la mora del empleador en el pago de los aportes a pensión, no puede trasladarse al afiliado, máxime que la entidad de seguridad social debió adelantar las acciones de cobro pertinentes. Que, en razón de lo anterior, el actor acredita un total de 1.021.26 semanas en toda su vida laboral de las cuales 956.5 se sufragaron a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y 1.008.4 semanas se cotizaron al 8 de agosto de 2013 cuando el asegurado cumplió los 60 años de edad, resultando beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para acceder a la pensión de vejez conforme lo previsto en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990. Que la prestación económica se reconoce a partir del 1º de febrero de 2015, por cuanto en este juicio se configuró parcialmente la prescripción, toda vez que la reclamación administrativa se presentó el 3 de septiembre de 2018, Colpensiones negó la prestación mediante la Resolución de 24 de septiembre de 2018 notificada en la misma fecha y la demanda se instauró el 3 de mayo de 2019 cuando ya habían transcurrido más de 3 años de causado el derecho pensional, por lo que prescriben las mesadas causadas con anterioridad al 3 de septiembre de 2015.

### **CONSIDERACIONES**

El documento de identidad que reposa en el expediente informa que el señor Rigoberto Vega Silva nació el 8 de agosto de 1953, tenía 40 años de edad el 1º de abril de 1994 cuando entró en vigencia en el sector privado el Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, o sea, que es beneficiario, en principio, del régimen de transición previsto en el artículo 36 de esta normatividad, que conservó la edad, el tiempo de servicios o el número de semanas de cotización y el monto de la pensión por vejez establecidos en el régimen anterior, a favor de tres categorías de trabajadores: los hombres con cuarenta o más años de edad, las mujeres con treinta y cinco o más años de edad, y unos y otras que independientemente de su edad tuviesen quince o más años de servicios cotizados.



El régimen anterior al cual se hallaba afiliado el accionante, era el contenido en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por medio del Decreto 758 de la misma anualidad, que para acceder a la pensión por vejez exigía sesenta o más años de edad a los hombres o cincuenta y cinco o más años de edad a las mujeres, y un número de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado 1.000 semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo.

Adicionalmente, el Parágrafo Transitorio 4° del Acto Legislativo 001 de 2005 expedido el 25 de julio del mismo año, instituyó el 31 de julio de 2010 como límite para la vigencia del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, y demás normas que lo desarrollan, excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen tuviesen cotizadas, al menos, 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, a los cuales se les mantuvo tal régimen hasta el año 2014.

Las historias laborales obrantes en el proceso dan cuenta que a la vigencia del Acto Legislativo referido el accionante contaba con 966 semanas, que le permitían conservar el régimen de transición hasta el 2014, y que cotizó hasta el 31 de enero de 2015 y durante toda su vida laboral 987.3 semanas, de las cuales 261 semanas corresponden a los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, corridos entre el 8 de agosto de 1993 y la misma fecha de 2013, razón por la cual no consolidó el derecho a la pensión por vejez en los términos del Decreto 758 de 1990.

En la contabilización de estas semanas la Sala tuvo en cuenta:

- 8.57 semanas de los ciclos noviembre y diciembre de 1986.
- 3.289 semanas del ciclo enero de 1998, que tienen la observación “Pago aplicado al periodo declarado”. Y
- 4.29 semanas del ciclo febrero de 1998, que tienen la observación “Pago aplicado a periodos anteriores”. Todas laboradas al servicio del empleador ICOLLANTAS S.A., con quien estuvo vinculado el demandante de

manera ininterrumpida desde el 10 de marzo de 1981 hasta el 15 de marzo de 1998, con novedad de retiro.

Se precisa que los periodos noviembre y diciembre de 1986 (ver folio 23 reverso) y febrero de 1998 están registrados en la historia laboral pero no fueron incluidos en la suma de las semanas, y el ciclo enero de 1998 no se contabilizó en forma completa.

En criterio de la Sala, la administradora de pensiones estaba obligada a contabilizar los periodos aludidos, porque además de que en el actual Régimen de Seguridad Social las pensiones reguladas por éste deben ser cubiertas por los gestores especializados en la administración del Sistema General de Pensiones en aras de garantizarse cabal y verdaderamente el cumplimiento de las finalidades y objetivos del mismo. El criterio actual de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en torno a los efectos de la mora patronal impone que se contabilicen para efectos pensionales cotizaciones de los trabajadores subordinados que no hayan sido cubiertas, pero que se entienden causadas cuando se prestó el servicio, mientras no haya declaración de inexistencia de las mismas, lo que sucede cuando no obstante la diligencia de la Administradora en la gestión de cobro se consideran de imposible recaudo (Sentencia de 5 de octubre de 2010, Expediente 41.382).

En este juicio, se encuentra probado que Colpensiones requirió a la sociedad ICOLLANTAS S.A. respecto del pago de los ciclos pendientes, y para el 5 de diciembre de 2014 se estaba llevando a cabo el proceso de depuración y análisis del estado de cuenta con el empleador en mención con el fin de obtener el pago de las deudas a que hubiese lugar o las correcciones respectivas a las novedades de cada una de las historias laborales del trabajador, sin que obre en el expediente prueba de trámite posterior alguno.

En lo relativo a la responsabilidad por la mora en el pago de las cotizaciones pensionales, en la providencia SL-3707 de 2017, la Corporación mencionada indicó:

“...Ahora bien, en cuanto a las alegaciones del censor referentes a la responsabilidad en caso de mora en el pago de aportes a la seguridad social, cumple recordar que la Corte en sentencia CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270, varió su jurisprudencia y estableció que cuando se presente dicha situación, y esto impida el acceso a las prestaciones, si además medió incumplimiento de la administradora en el deber legal que tiene de cobro, es a esta última a quien le incumbe el pago de las mismas a los afiliados o sus beneficiarios...”

Lo cual reiteró en la sentencia SL-3490 de 2019, así:

“...para el caso de los afiliados en condición de trabajadores dependientes, que si han cumplido con el deber que les asiste frente a la seguridad social de prestar el servicio y así causar la cotización, no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del empleador en el pago de los aportes y que antes de trasladar a éste (sic) las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber de cobro...”.

El Alto Tribunal ha precisado además que para respaldar la existencia de periodos sin cotización e inmersos en mora, cuando la entidad de seguridad social no ejerció acciones de cobro, resulta necesario demostrar que en ese lapso existió un contrato de trabajo o, en otros términos, que el empleador moroso estaba obligado a efectuar dichas cotizaciones porque el trabajador prestó servicios durante el mismo.

Así se advierte en las sentencias SL-763 de 2014; SL-14092 de 2016; SL-3707, SL-5166, SL-9034 y SL-21800 de 2017; SL-115, SL-1624 de 2018; y SL-1691, SL-3055 y SL-5335 de 2019.

La Sala no tiene en cuenta las demás semanas relacionadas en la demanda, supuestamente causadas con ICOLLANTAS S.A. del 1º al 15 de marzo de 1998, en la medida que tal empleador reportó la novedad de retiro al sistema de pensiones el 28 de febrero de 1998. Y tampoco las aludidas con la empleadora CENTRO PARROQUIAL DE SOACHA entre el 1º de febrero y el 30 de julio de 1979.

En primer lugar, porque si bien el accionante solicitó ante Colpensiones la corrección de historia laboral para que le fueran incluidos los periodos comprendidos entre febrero y julio de 1979, y la entidad le indicó el 30 de marzo de 2015 que “...*el aportante CENTRO PARROQUIAL DE SOACHA, únicamente realizó cotizaciones a su nombre para los periodos que se reflejan en su historia laboral...*”, que en caso de estar de acuerdo debería suministrar documentos probatorios que dieran cuenta de la relación laboral en los periodos 197902 a 197907. “...*Cabe aclarar que el ingreso tiene 154 días ya que es un ingreso retroactivo asentado por el empleador CENTRO PARROQUIAL DE SOACHA en el ciclo 197908...*”. Lo cierto es que en este juicio no obra prueba, y menos en el expediente administrativo del asegurado, de que el antes citado hubiese allegado la documentación que diera cuenta de la relación laboral en los periodos 197902 a 197907 requerida por la entidad demandada para aquella época, pues solo con la demanda fue allegada la certificación laboral de fecha 19 de febrero de 2019, donde el Sacerdote Carlos H. Oviedo G. Rector del Colegio Bolívar de Soacha, que pertenecía al Centro Parroquial de Soacha con numero patronal 01-00-8206849, da cuenta que el señor Rigoberto Vega Silva laboró para dicha institución del 1° de febrero al 30 de noviembre de 1979 en el cargo de docente, devengando un salario mensual de \$5.200.

En ilación a lo anterior, pese a que fue arrimada copia extraída del original del documento y /o formulario “... DE ENTRADA DEL TRABAJADOR...”, expedida por la Notaria Segunda del Círculo de Soacha Cundinamarca el 16 de octubre de 2014, donde se indica que el empleador Centro Parroquial de Soacha con número patronal 01-00-8206849, afilió al señor Rigoberto Vega Silva, al Instituto de Seguros Sociales, como profesor, con fecha de ingreso a la empresa del 1° de febrero de 1979 y con un salario de \$5.000, documento que si milita en el expediente administrativo, en el mismo no se visualiza con claridad la fecha de radicación, ni la de la afiliación como tal ante el Instituto de Seguros Sociales, y mucho menos el riesgo, máxime que Colpensiones en la respuesta de 30 de marzo de 2015 señala que “...*Cabe aclarar que el ingreso tiene 154 días ya que es un ingreso retroactivo asentado por el empleador CENTRO PARROQUIAL DE SOACHA en el ciclo 197908...*”, y la historia laboral del actor solo registra afiliación con

dicho empleador para el 1° de agosto de 1979 con aportes hasta el 30 de noviembre de la misma anualidad, equivalentes a 17.43 semanas, y con un salario reportado por valor de \$4.410 que no guarda correspondencia con el indicado en la certificación laboral de 19 de febrero de 2019, donde se aduce que fue de \$5.200, ni tampoco con el salario referido en el documento y /o formulario “... DE ENTRADA DEL TRABAJADOR...”, expedido por la Notaria Segunda del Círculo de Soacha Cundinamarca el 16 de octubre de 2014, que señala uno de \$5.000.

En segundo lugar, porque el Juez no puede contabilizar para efectos pensionales semanas, ni dar por establecidos hechos que no estén debidamente acreditados y probados, respectivamente, dentro del proceso.

En tercer lugar, porque en las historias laborales no aparecen registrados esos períodos, así como tampoco obra otro medio probatorio que respalde las cotizaciones allí pretendidas, por lo que resulta imposible acreditar los mismos.

En cuarto lugar, porque el COLEGIO BOLÍVAR DE SOACHA Y/O CENTRO PARROQUIAL DE SOACHA no fue vinculado al presente juicio.

En quinto lugar, porque conforme lo precisado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL - 2731 de 11 de marzo de 2015, radicado 37.022, aún en los supuestos de una omisión en la afiliación o de una afiliación tardía, la consecuencia no sería el reconocimiento de la pensión de jubilación por el empleador o de manera compartida con el Instituto de Seguros Sociales, porque a la luz del artículo 9° de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, la consecuencia para el empleador que omitió la afiliación de sus trabajadores o los afilió tardíamente “... no es otra que pagar el capital correspondiente al tiempo dejado de cotizar necesario para financiar la pensión por vejez, establecido desde la vigencia del... artículo 6° del Acuerdo 189 de 1965, aprobado por el Decreto 1824 del mismo año. Entonces, debe responder con el traslado a la entidad pensional del valor del cálculo actuarial liquidado en la forma indicada por el Decreto 1887 de 1994 a satisfacción de la entidad que recibe...”.

Lo cual fue reiterado en la sentencia SL - 361 de 2020, citando la sentencia SL646 de 2013, así:

“En el sub examine el Tribunal impuso a la Universidad Jorge Tadeo Lozano el pago del cálculo actuarial, porque Radicación n.º 46729 23 juzgó era lo procedente en este caso, lo cual como se indicó al inicio de estas consideraciones, no fue discutido en el recurso, y de todas maneras ha sido avalado por la Corte, incluso en la sentencia CSJ SL646 de 2013, recién citada, cuando afirmó:

El parágrafo 1º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el 33 de la Ley 100 de 1993, dispone: ‘(...) Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta: (...) d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador. En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional’. En reciente decisión del pasado 20 de marzo, radicación 42.398, la Sala, en línea de doctrina, señaló que dado que la prestación, bajo estudio, no se causó antes de la Ley 100 de 1993, su expectativa de pensión está regulada por esta disposición y sus modificaciones. Por tanto, se dijo, que la consecuencia para el empleador omiso de afiliar a sus trabajadores o, en caso de una afiliación tardía, a la luz del artículo 9º de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, no es otra que pagar el capital correspondiente al tiempo dejado de cotizar necesario para financiar la pensión por vejez, establecido desde la vigencia del precitado artículo 6º del Acuerdo 189 de 1965, aprobado por el Decreto 1824 del mismo año. Entonces, debe responder con el traslado a la entidad pensional del valor del cálculo actuarial liquidado en la forma indicada por el Decreto 1887 de 1994 a satisfacción de la entidad que recibe, como quedó atrás dicho...”.

En criterio del Alto Tribunal la sola relación de trabajo tiene la fuerza jurídica necesaria para fundar y justificar la obligación del empleador de concurrir a la financiación de las prestaciones del sistema de seguridad social, como un

corolario natural del trabajo, en aplicación de principios como la dignidad humana, la solidaridad, la seguridad y la protección social.

Al respecto, en la sentencia SL - 19556 de 21 de noviembre de 2017, Radicado 43.74, la Corporación indicó:

“...Entonces, resulta inaceptable considerar que el trabajo humano puede, bajo determinadas circunstancias, no tener efectos en materia pensional. De una forma u otra, el empleador que se sirve de la fuerza de trabajo de una persona, quien por el transcurso del tiempo ha visto mermada su capacidad laboral, debe contribuir a la cobertura del riesgo de vejez, ya sea mediante el pago directo de la pensión o el giro de un título pensional suficiente.

Admitir la tesis libérrima de las obligaciones propuesta por el demandado, conduciría a aceptar que, no obstante, el empleador se benefició de la actividad del trabajador, queda exento del deber de contribuir a su protección social. En este sentido, no sobra aclarar que el pago de la pensión o del aporte para su financiación no es un regalo o una concesión fundada en consideraciones proteicas y etéreas de equidad, sino, se insiste, un derecho derivado del vínculo laboral.

Por esto mismo, los ingredientes subjetivos o de culpa que el casacionista quiere incluir para condicionar el giro del título pensional, son improcedentes, pues la obligación de concurrir al financiamiento de la pensión, además de ser indisponible e irrenunciable, es consecuencia inmediata de la prestación del servicio. Así las cosas, una vez sean derruidas todas las barreras que impidan dar cumplimiento a esta obligación, el empleador debe utilizar los mecanismos que tenga a su alcance para solucionar los trances en que no pudo satisfacer sus obligaciones con la seguridad social en pensiones, lo cual, como se vio en este caso, se remedia mediante el pago de un cálculo actuarial...”.

De acuerdo con lo expuesto, si bien el CENTRO PARROQUIAL DE SOACHA efectuó el pago de las cotizaciones al sistema general de pensiones en favor del señor Rigoberto Vega Silva y a satisfacción del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, por 17.43 semanas, reportando la novedad de ingreso

el 1° de agosto de 1979 y registrando la novedad de retiro, el 30 de noviembre de la misma anualidad (ver folio 24 reverso), lo cierto es que el pago de tales aportes por si solo no acredita la afiliación efectiva y el cubrimiento de la totalidad de las cotizaciones al sistema general de pensiones por el tiempo que estuvo vigente la relación laboral, pues en el expediente no obra ninguna prueba indicativa de tal afiliación para el 1° de febrero de 1979.

En sexto lugar, porque el 6 de febrero de 2015, la entidad demandada dando respuesta a la solicitud formulada por el actor respecto del cálculo actuarial por omisión del empleador privado, precisó “... *se observa que si el empleador no afilió o no reportó novedad de vínculo laboral al sistema general de seguridad social en pensiones a su empleado, deberá transferir el valor actualizado (cálculo actuarial) a satisfacción de la entidad administradora, para que estos aportes le sean tenidos en cuenta como tiempo de cotización para efectos del eventual reconocimiento de la pensión. Esta obligación por disposición del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, se encuentra en cabeza del empleador por cuanto omitió uno de los deberes legales que tenía con su trabajador...*”, lo que en criterio de la Sala constituye un indicio, de que el accionante adelantó gestiones en aras de obtener un cálculo actuarial.

En séptimo lugar, porque el artículo 164 del Código General del Proceso establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, por su parte el artículo 167 del mismo estatuto, en alianza con el artículo 1757 del Estatuto Civil, consagra el principio de la carga de la prueba que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el principio universal de la carga probatoria, y ha explicado que quien afirma una cosa está obligado a probarla. Quien pretende o demanda un derecho debe alegarlo, y adicionalmente, debe demostrar los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba al demandado cuando éste se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que



el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado (Sentencia de 5 de agosto de 2009, Expediente 36.549).

En consecuencia, se concluye que el señor Rigoberto Vega Silva no consolidó su derecho a la pensión por vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990, así como tampoco colma las exigencias del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, puesto que cumplió 62 años de edad el 8 de agosto de 2015, en esta fecha la disposición referida exigía 1.300 semanas de cotización y el mencionado ciudadano sólo contaba con 987.3 semanas.

Aclara la Sala, que en virtud de lo expuesto y ante la posible existencia de un hecho sobreviniente modificativo del derecho sustancial de carácter mínimo e irrenunciable, el demandante pueda pretender reclamar ante la administración de justicia el reconocimiento de la prestación económica, como por ejemplo acreditar la densidad de semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez, o cualquier otra situación fáctica o jurídica que se presentase con respecto al COLEGIO BOLÍVAR DE SOACHA Y/O CENTRO PARROQUIAL DE SOACHA.

Así las cosas, se revocará la decisión que se revisa en consulta.

## **DE LAS COSTAS**

Las costas en la primera instancia corren en favor de Colpensiones y a cargo del señor Rigoberto Vega Silva.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

**PRIMERO:** Revocar en su integridad la sentencia proferida el 27 de enero de 2020 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, por las razones expuestas.

**SEGUNDO:** Absolver a Colpensiones de todas las pretensiones formuladas por el señor Rigoberto Vega Silva.

**TERCERO:** Las costas en la primera instancia corren en favor de Colpensiones y a cargo del señor Rigoberto Vega Silva.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a31e246f6baf9d292b8f9ec8db29e6c821c6bc94f33627d83d52fdaa62ff0dc6**

Documento generado en 14/07/2022 02:53:32 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>